

MÁS ALLÁ DE LA PROSCRIPCIÓN: HACIA UNA REGULACIÓN EFECTIVA DE LA DESINFORMACIÓN EN CAMPAÑAS ELECTORALES

Data de aceite: 03/09/2024

Ana Jacoby

Dra. Universidad Autónoma de Campeche
San Francisco de Campeche – México
ORCID: 0000-0002-8493-4884

RESUMEN: La desinformación representa una amenaza creciente para la integridad de los procesos democráticos, ya que distorsiona el debate público, manipula la opinión ciudadana y debilita el principio de autodeterminación política (Innerarity & Colomina, 2020). Su impacto se agrava en contextos electorales, donde puede incidir directamente en los resultados y socavar la legitimidad del sistema representativo (Wardle & Derakhshan, 2017). Ante este desafío, varios Estados latinoamericanos han propuesto medidas normativas que incluyen sanciones severas, como la proscripción electoral de candidaturas que difundan información falsa durante la campaña. Este artículo analiza críticamente esta medida, a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la primera sección del artículo se reconstruyen los principios jurisprudenciales relevantes en materia de proscripción electoral. Luego, se examinan dos proyectos legislativos presentados en Perú y Chile que contemplan la exclusión

de candidaturas como sanción por desinformación electoral. Finalmente, se evalúa la compatibilidad de estas propuestas con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados y se analizan distintas herramientas para combatir la desinformación en contextos electorales. Como alternativa a medidas punitivas, que podrían ser desproporcionadas o facilitar un uso arbitrario del poder, se sugieren enfoques más eficaces y garantistas, como la promoción de la alfabetización mediática, el fortalecimiento de mecanismos independientes de verificación de datos. Asimismo, resulta fundamental el diálogo con las plataformas digitales para que éstas asuman un rol activo en mitigar la propagación de contenidos desinformativos. Por último, se destaca la necesidad de establecer criterios de transparencia y trazabilidad en la publicidad electoral en línea. Estas estrategias permiten abordar el fenómeno de la desinformación en tiempos electorales sin vulnerar derechos fundamentales y reforzando la integridad democrática.

PALABRAS-CLAVE: Desinformación, Inhabilitación de candidaturas, Derechos políticos, Libertad de expresión, Integridad electoral, América Latina

BEYOND PROSCRIPTION: TOWARDS AN EFFECTIVE REGULATION OF DISINFORMATION IN ELECTORAL CAMPAIGNS

ABSTRACT: Disinformation poses a growing threat to the integrity of democratic processes by distorting public discourse, manipulating public opinion, and weakening the principle of political self-determination (Innerarity & Colomina, 2020). Its impact becomes particularly acute in electoral contexts, where it can influence voting outcomes and undermine the legitimacy of representative systems (Wardle & Derakhshan, 2017). As a response to this threat, several Latin American states proposed legal reforms that include severe sanctions, such as the proscription of candidates who disseminate false information during electoral campaigns. This article critically examines the compatibility of such disqualification measures with the legal standards of the Inter-American Human Rights System. The first section of the article reconstructs the relevant jurisprudential principles concerning electoral proscription. The second section analyzes two legislative proposals introduced in Peru and Chile, which contemplate candidate exclusion as a sanction for spreading electoral disinformation. The final section assesses the consistency of these initiatives with the international human rights obligations of these States and explores alternative tools to combat disinformation during electoral processes. As an alternative to punitive measures—which may be disproportionate or prone to arbitrary application of power—the article proposes more effective and rights-based approaches. These include promoting media literacy, strengthening independent fact-checking mechanisms, and fostering dialogue with digital platforms to ensure their active involvement in countering disinformation. Finally, it underscores the importance of transparency and traceability in online political advertising. These strategies aim to address electoral disinformation in a way that upholds fundamental rights and reinforces democratic integrity.

KEYWORDS: Disinformation, Electoral Integrity, Freedom of Expression, Political Rights, Candidate Disqualification, Human Rights, Latin America

INTRODUCCIÓN

La desinformación en procesos electorales representa una amenaza grave para la integridad democrática, ya que distorsiona el debate público, manipula la voluntad popular y socava la legitimidad de los resultados electorales (Colomina et al., 2021, McKay & Tenove, 2021). Diversos estudios han documentado cómo la difusión masiva de contenidos falsos o engañosos durante campañas electorales puede incidir en la decisión del electorado, debilitando el principio de autodeterminación ciudadana (Wardle & Derakhshan, 2017). En contextos de polarización política, la desinformación no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también promueve discursos de odio, deslegitimación del adversario y ataques a los fundamentos del pluralismo. La experiencia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, donde Donald Trump fue acusado de beneficiarse de campañas de desinformación a través de redes sociales, marcó un punto de inflexión en la agenda regulatoria internacional (Froehlich, 2020).

Desde el enfoque del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la regulación de la desinformación presenta desafíos complejos, ya que cualquier medida estatal debe procurar garantizar la integridad del proceso electoral respetando plenamente las garantías del derecho a la libertad de expresión y la participación política.

Casos recientes en América Latina muestran cómo la desinformación ha sido utilizada de forma estratégica por actores políticos para alcanzar el poder, al tiempo que se denuncian intentos de censura bajo el pretexto de combatirla. En Brasil, Jair Bolsonaro fue acusado por el Tribunal Superior Electoral de difundir sistemáticamente noticias falsas para desacreditar el sistema de votación electrónica, lo que generó una investigación sobre su idoneidad como candidato para futuras elecciones (Santini et. Al, 2021). En Argentina, durante las elecciones de 2023, la campaña de Javier Milei fue objeto de denuncias por divulgar afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral y manipular información económica para erosionar la credibilidad del gobierno. Estos ejemplos ilustran tanto la gravedad del fenómeno, como el peligro de que las respuestas estatales sean desproporcionadas o instrumentalizadas con fines de proscripción electoral.

Frente a los desafíos que plantea la desinformación durante las campañas electorales, en los últimos años diversas democracias latinoamericanas han debatido propuestas normativas que habilitan la exclusión de candidaturas por la difusión de información falsa. En países como Perú y Chile se han presentado iniciativas legislativas orientadas a sancionar la propagación de desinformación mediante medidas severas, tales como la inhabilitación electoral. Si bien estas propuestas suelen justificarse en la necesidad de proteger la integridad y transparencia del proceso democrático, suponen una restricción directa al ejercicio de los derechos políticos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En contextos institucionales frágiles o polarizados, este tipo de sanciones pueden derivar en un uso arbitrario o abusivo del poder estatal, afectando principios esenciales del régimen democrático, como el pluralismo político y la igualdad de participación.

El objetivo de este artículo es analizar críticamente la figura de la proscripción electoral por desinformación, a partir de un análisis de los estándares interamericanos en la materia. En una primera sección, se reconstruyen los principios y criterios jurisprudenciales del Sistema Interamericano aplicables a la exclusión de candidaturas, ya sea por desinformación u otras causas. En una segunda sección, se examinan los proyectos de ley propuestos en Chile y Perú, con énfasis en aquellos artículos que introducen sanciones como la inhabilitación de candidaturas. Finalmente, en la tercera parte, se ofrece un análisis comparado de dichos casos a la luz de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, y se presentan propuestas para una regulación adecuada y compatible con la democracia constitucional de los fenómenos de desinformación electoral.

I. ESTÁNDARES INTERAMERICANOS SOBRE LA PROSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS ELECTORALES

La proscripción electoral —esto es, la exclusión de una persona del derecho a postularse para cargos de elección popular— constituye una restricción directa a los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Este artículo establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad popular; y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (CADH, art. 23).

En este marco, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado estándares rigurosos en materia de limitaciones a los derechos políticos, incluyendo la proscripción electoral. Aunque la jurisprudencia interamericana no ha abordado de forma directa casos vinculados con desinformación electoral, sí ha establecido una serie de requisitos estrictos que toda restricción al derecho a ser elegido debe cumplir para ser considerada legítima.

1. Principio de legalidad

El principio de legalidad exige que toda restricción al derecho a ser elegido esté prevista de manera expresa, clara y previa en una ley formal, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio no solo protege a los ciudadanos frente a aplicaciones arbitrarias del poder público, sino que también garantiza que las normas sean predecibles y accesibles, permitiendo a los individuos conocer de antemano las consecuencias jurídicas de sus actos. Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las disposiciones legales que limitan derechos deben estar formuladas “con la precisión necesaria para evitar interpretaciones abusivas” (Corte IDH, Caso Kimel vs. Argentina, 2008, párr. 63).

Un fallo emblemático en la materia es el del Caso Yatama vs. Nicaragua (2005), donde la Corte IDH determinó que la exclusión de una organización indígena del proceso electoral regional —con base en requisitos formales— constituyó una violación del derecho a ser elegido. La Corte subrayó que la regulación de los derechos políticos debe estar contenida en una ley formal y no en normas secundarias o reglamentarias de aplicación discrecional. Además, sostuvo que las restricciones deben respetar los principios de igualdad y no discriminación (Yatama vs. Nicaragua, párr. 184).

En este contexto, una ley que habilita la proscripción electoral con base en acusaciones de desinformación puede resultar incompatible con el principio de legalidad, especialmente si utiliza conceptos jurídicos vagos o indeterminados como “noticias falsas”

o “información engañosa”, en lugar de contener criterios objetivos y verificables. Tales ambigüedades abren la puerta a interpretaciones arbitrarias o políticamente motivadas, afectando de forma desproporcionada el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en condiciones de igualdad. Como advierte la jurisprudencia interamericana, toda restricción a los derechos políticos debe cumplir con requisitos estrictos de claridad normativa, necesidad y proporcionalidad, para no convertirse en una herramienta de exclusión ilegítima o persecución política.

2. Rechazo a sanciones impuestas sin proceso judicial

En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la inhabilitación para ejercer cargos públicos solo puede imponerse como consecuencia de una sentencia penal condenatoria firme, emitida por una autoridad judicial independiente y tras un proceso que respete plenamente el derecho al debido proceso. Este estándar, reiteradamente confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, busca evitar sanciones arbitrarias, desproporcionadas o de naturaleza política, que limiten el ejercicio de los derechos políticos sin las debidas garantías.

Un caso emblemático en esta materia es el Caso *López Mendoza vs. Venezuela* (2011), en el que la Corte IDH examinó la inhabilitación administrativa al dirigente político venezolano Leopoldo López, que fue impuesta por un órgano administrativo, sin intervención judicial y sin una sentencia judicial condenatoria. El Tribunal consideró que dicha medida violó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al limitar el derecho a ser elegido sin una decisión judicial definitiva. La Corte fue clara al señalar que en “en el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”. (Corte IDH, *López Mendoza vs. Venezuela*, 2011, párr. 107).

Si bien este estándar es fundamental para proteger los derechos políticos frente a abusos del poder, puede resultar insuficiente o ineficaz frente a casos de desinformación electoral, especialmente cuando estos ocurren durante el desarrollo de una campaña. La necesidad de una sentencia penal firme —que implica un juicio completo, con todas las etapas procesales y posibles apelaciones— dificulta responder de manera oportuna a la difusión de noticias falsas o campañas de desinformación con capacidad de alterar el resultado electoral. Esta tensión plantea un desafío normativo: cómo garantizar el derecho al debido proceso sin permitir que la lentitud de la justicia penal obstaculice la protección del proceso democrático, lo cual exige repensar mecanismos de control con mayores garantías, evitando sanciones administrativas sumarias o inhabilitaciones preventivas que puedan vulnerar los estándares interamericanos.

3. Finalidad legítima y principio de proporcionalidad

En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda restricción a los derechos políticos, incluyendo el derecho a ser elegido, debe cumplir con tres condiciones esenciales: perseguir una finalidad legítima, ser idónea y necesaria para alcanzar dicho fin, y respetar el principio de proporcionalidad. Esto significa que las medidas restrictivas deben ser aptas para lograr el objetivo perseguido, no deben existir medios menos lesivos disponibles, y el impacto sobre los derechos fundamentales debe ser lo menor posible. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de proporcionalidad exige evaluar si el sacrificio del derecho involucrado es excesivo en relación con el beneficio que se pretende alcanzar (Corte IDH, Caso Kimel vs. Argentina, 2008, párr. 86).

Estos criterios fueron reiterados en la Opinión Consultiva OC-28/21, donde, aunque centrada en la reelección presidencial indefinida, la Corte reafirmó que los derechos políticos no pueden restringirse de manera que anulen su contenido esencial. (Corte IDH, OC-28/21). Además, el Tribunal advirtió que los derechos políticos son pilares del sistema democrático, y que sus limitaciones deben ser interpretadas restrictivamente y con alto umbral de justificación.

Desde esta perspectiva, la proscripción electoral por la difusión de desinformación durante una campaña electoral —sin que medie una sentencia penal firme ni se garanticen plenamente los derechos de defensa— puede constituir una medida desproporcionada. Aunque combatir la desinformación persigue un objetivo legítimo, como preservar la integridad del proceso democrático, inhabilitar a una candidatura como sanción puede resultar excesiva, especialmente si existen medios menos restrictivos para neutralizar los efectos del discurso engañoso, como la rectificación, el debate público o la moderación proporcional de contenidos. Imponer la sanción más gravosa en un contexto altamente opinable y con márgenes de interpretación amplios afecta el núcleo del derecho a ser elegido y distorsiona la competencia electoral, generando un efecto inhibitor sobre el debate político y posibilitando el uso estratégico de las normas para excluir adversarios políticos.

4. Garantía del pluralismo y la libre expresión

El ejercicio de los derechos políticos está intrínsecamente vinculado a la libertad de expresión y al pluralismo democrático, pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Según la jurisprudencia interamericana, cualquier restricción a la participación política debe observar un estándar estricto de escrutinio, de manera que no supriman voces disidentes ni restrinjan indebidamente el debate público. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a ser elegido no puede analizarse de forma aislada, sino que debe interpretarse en conjunto con el derecho de toda la sociedad a recibir ideas, información y propuestas diversas en el marco del proceso electoral (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, párrs. 30-32).

Este vínculo entre participación política y libertad de expresión fue destacado en el Caso Castañeda Gutman vs. México (2008). En dicho fallo, la Corte reafirmó que el acceso a cargos públicos es una dimensión esencial de la participación ciudadana, y que las condiciones para ejercer este derecho deben garantizar una competencia abierta y equitativa. Aunque validó la exigencia de postulación a través de partidos políticos, el Tribunal fue claro al advertir que: “El acceso a cargos públicos no puede estar condicionado por barreras indebidas que limiten la libre participación” (Corte IDH, Castañeda Gutman vs. México, 2008, párr. 146).

Desde esta óptica, la proscripción electoral basada en la supuesta difusión de desinformación representa un riesgo grave para el principio de pluralismo y para la libertad de expresión política, especialmente si se impone sin criterios objetivos, mecanismos imparciales o garantías procesales robustas. Las campañas electorales son momentos intensos de confrontación de ideas, donde el margen del discurso protegido es especialmente amplio. Sancionar con la exclusión de una candidatura por la difusión de contenidos considerados “engañosos” o “falsos” —sin una evaluación judicial firme ni estándares claros— puede tener un efecto silenciador sobre el debate democrático, inhibiendo la crítica, penalizando el disenso y distorsionando la libre competencia de proyectos políticos. Como advierte la Corte IDH, “el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura” son condiciones sine qua non de una sociedad democrática (Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 49), y no pueden sacrificarse mediante restricciones desproporcionadas a la participación electoral.

II. LAS LEYES SOBRE PROSCRIPCIÓN ELECTORAL POR DESINFORMACIÓN EN LATINOAMÉRICA

En América Latina, la proscripción electoral ha sido empleada en diversas ocasiones como una herramienta para limitar arbitrariamente la participación política, particularmente de sectores opositores. Por mencionar solamente los casos más resonados, en países como Venezuela y Nicaragua, esta práctica se ha intensificado en los últimos años mediante inhabilitaciones administrativas, sin que medie una sentencia penal firme. Un caso emblemático es el de López Mendoza vs. Venezuela mencionado anteriormente, aunque autores como Roselis Dias de Freitas (2023) consideran que este caso es parte de un patrón sistemático, que permitió en las elecciones de 2021 inhabilitar a más de 20 figuras opositoras. Asimismo, en Nicaragua, organizaciones como Human Rights Watch y la CIDH han documentado la exclusión sistemática de candidatos opositores a través de leyes penales sobre “traición a la patria” o “terrorismo”, utilizadas de forma vaga para restringir la participación electoral, sin garantías judiciales ni debido proceso (Human Rights Watch, 2023).

La práctica de la proscripción electoral en América Latina trasciende las diferencias ideológicas o el signo político de los gobiernos. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Bolivia, donde el expresidente Evo Morales fue inhabilitado como candidato al Senado en 2020 bajo el argumento de no cumplir con el requisito de residencia permanente en el país. Si bien era cierto que el candidato se encontraba viviendo en el extranjero al momento de presentar su candidatura, la sentencia de inhabilitación ignoraba el contexto en el que Morales se vio forzado a abandonar Bolivia tras su renuncia a la Presidencia bajo la presión militar, lo cual impidió el ejercicio pleno de sus derechos políticos (*Sardiña, 2020*). La práctica de la proscripción de candidatos opositores, que atraviesan todo el espectro político e ideológico, reflejan una tendencia autoritaria, que erosiona el pluralismo político, mediante mecanismos que no solo afectan el derecho a ser elegido, sino también el ejercicio de la libertad de expresión y la participación democrática de toda la ciudadanía.

En este contexto, el presente trabajo se centra en los casos de Chile y Perú. Si bien se trata de dos proyectos de ley que no fueron aprobados, estas son las iniciativas normativas que más explícitamente vinculan expresamente la proscripción electoral con la difusión de desinformación durante campañas políticas. Justamente por tratarse de un fenómeno incipiente pero con alto potencial de impacto, se decidió enfocar el análisis en estos proyectos, con el fin de discutir su compatibilidad con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1. El caso de Perú

En octubre de 2020, en Perú se presentó el Proyecto de Ley que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones N.º 26859, con el objetivo de prohibir la difusión de noticias falsas como parte de la propaganda electoral. En particular, el artículo 187-A del proyecto establecía que:

“Quedan prohibidas, como forma de propaganda política, las imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad del proceso electoral en curso y/o de la votación próxima a realizarse, y sean difundidas de forma deliberada, artificial, automatizada y/o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social.”

La sanción prevista para los candidatos que incurrieran en esta infracción era la exclusión del proceso electoral en curso, es decir, la proscripción electoral: “Tratándose de un candidato a un cargo de elección popular, quedará excluido del proceso electoral en curso” (Ley 26859, art. 187-A).

Adicionalmente, el proyecto de reforma preveía sanciones penales severas. Según el artículo 389 de la Ley 26859, se establecía que:

“Será reprimido, también, con pena privativa de la libertad no menor de dos años e inhabilitación, quien, durante el período legal de campaña electoral, a sabiendas, difunda imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad del proceso electoral en curso y/o de la votación próxima a realizarse, y sean difundidas de forma deliberada, artificial, automatizada y/o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social.”

Asimismo, se preveían sanciones equivalentes para quienes realizaran campañas de telemarketing o mensajería instantánea masiva sin consentimiento expreso del destinatario. En caso de que el autor del delito fuese un candidato, también se lo excluiría del proceso electoral: “Tratándose de un candidato a un cargo de elección popular, quedará además excluido del proceso electoral en curso” (Ley 26859, art. 389).

Este tipo de disposiciones contravienen varios principios fundamentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En primer lugar, vulneran el principio de legalidad, ya que recurren a formulaciones vagas y ambiguas —como “hechos capaces de alterar la sinceridad del proceso electoral”— que no permiten prever con claridad qué conductas están prohibidas. Como se indicó en el apartado anterior, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige que toda restricción a un derecho debe estar definida con “precisión y claridad a través de una ley formal y material” para evitar interpretaciones arbitrarias que afecten la libertad de expresión y los derechos políticos.

Además, la imposición de penas de prisión o la exclusión de candidaturas sin mediar una sentencia penal firme, como lo exige la Corte en casos como *López Mendoza vs. Venezuela* (2011), vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a cargos públicos garantizados por el artículo 23 de la CADH. Finalmente, estas sanciones afectan también los principios de proporcionalidad e idoneidad, ya que constituyen medidas excesivamente restrictivas frente al objetivo legítimo de proteger la integridad electoral. Como ha señalado la Corte IDH, cualquier limitación a los derechos políticos debe ser “la menos lesiva posible” y no puede anular su contenido esencial (OC-28/21, párr. 81).

2. El caso de Chile

En diciembre de 2022, se presentó en el Senado de Chile el Proyecto de ley que otorga protección a las personas frente a contenidos falsos o discursos de odio publicados o difundidos en plataformas digitales, identificado con el boletín número 15603-07. La iniciativa proponía, entre otras cosas, diversas reformas al Código Penal, con el objetivo de combatir la desinformación y los discursos de odio en entornos digitales.

Entre los cambios propuestos, el artículo 13 contemplaba la incorporación del nuevo artículo 193 bis al Código Penal, que sancionaría con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio, además de una multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, a quien “maliciosamente elabore, difunda, promocióne, financie o utilice en plataformas

digitales contenidos ilícitos” establecidos en los términos de la ley que “causen o puedan causar alarma pública o daño a personas o grupos determinados”. Asimismo, se tipificaba como delito el uso de contenidos automatizados no transparentados y se establecían agravantes si estas conductas se cometían mediante cuentas o sitios falsos.

El proyecto también proponía medidas adicionales en el ámbito electoral. En particular, el artículo 193 ter preveía que cualquier candidato a un cargo de elección popular que incurriera en las conductas descritas quedaría inhabilitado para participar en el proceso electoral en curso y no podría postularse durante un periodo de cinco años.

Por su parte, el artículo 193 quáter establecía sanciones aún más severas si los hechos eran cometidos por funcionarios públicos o personas electas, incluyendo la suspensión del cargo y la reducción del 50 % de su salario durante la condena.

Este tipo de propuestas legislativas entra en tensión con principios fundamentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En primer lugar, el principio de legalidad, referido anteriormente, exige que toda norma sancionatoria esté redactada con precisión, claridad y previsibilidad. Las expresiones ambiguas como “contenidos ilícitos que puedan causar alarma pública” o “discursos de odio” sin una definición clara, abren la puerta a interpretaciones discrecionales que pueden ser utilizadas de forma arbitraria para restringir la libertad de expresión.

En segundo lugar, estas disposiciones podrían violar el principio de proporcionalidad, ya que imponen sanciones penales severas y penas accesorias como la inhabilitación política, incluso sin requerir una condena penal firme previa, lo cual contraviene lo dispuesto por la Corte Interamericana en *López Mendoza vs. Venezuela* (2011, párr. 107). Además, al afectar el derecho a ser elegido por difundir presuntamente información falsa —una categoría notoriamente ambigua en contextos políticos polarizados— se compromete el pluralismo democrático, tal como ha sido protegido por la Corte en casos como *Castañeda Gutman vs. México* (2008, párr. 146). En conjunto, estas medidas pueden resultar desproporcionadas y contrarias a un enfoque de derechos que priorice el debate abierto y las garantías del debido proceso.

III. MÁS ALLÁ DE LA PROSCRIPCIÓN: HACIA UNA REGULACIÓN EFECTIVA DE LA DESINFORMACIÓN EN CAMPAÑAS ELECTORALES

Las iniciativas que buscan proscribir candidaturas por la difusión de información falsa plantean un dilema central entre la necesidad de proteger la integridad del proceso democrático y la obligación de garantizar los derechos políticos fundamentales. Si bien es legítimo que los Estados busquen combatir la desinformación, las medidas adoptadas deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y contar con garantías judiciales robustas.

Los casos analizados en Perú y Chile muestran que, en contextos de alta polarización, los conceptos jurídicos amplios o vagos —como “información falsa” o “fake news”— pueden derivar en sanciones desproporcionadas o arbitrarias que afectan la competencia electoral y restringen el pluralismo. En este sentido, el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece un conjunto de estándares claros que deben orientar cualquier reforma legal en la materia.

La proscripción de candidatos por difundir información falsa, puede interpretarse como una restricción excesiva que limita el debate democrático y, en ciertos casos, puede ser utilizada para silenciar posiciones disidentes o incómodas, contraviniendo los estándares de proporcionalidad y finalidad legítima establecidos por la jurisprudencia interamericana. Asimismo, la imposición de sanciones que excluyen a candidatos por difundir información falsa, sin un debido proceso que garantice la presunción de inocencia y la posibilidad de defensa, vulnera principios fundamentales del derecho a la participación política y a la libertad de expresión. La Corte Interamericana ha resaltado que las restricciones a estos derechos deben ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática y no deben ser empleadas como mecanismos de censura o control político.

Frente a estas limitaciones, es necesario explorar soluciones más efectivas y respetuosas de los derechos humanos para combatir la desinformación en campañas electorales. En primer lugar, el fortalecimiento de la educación mediática y ciudadana emerge como una estrategia clave, permitiendo a los ciudadanos identificar y cuestionar la información falsa o sesgada. En segundo lugar, la implementación de mecanismos de fact-checking y la promoción de contenidos verificados por entidades independientes pueden reducir significativamente la circulación de información falsa sin recurrir a medidas restrictivas que afecten derechos fundamentales. En tercer lugar, el Estado debe desempeñar un rol activo en la regulación de plataformas digitales, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en los algoritmos y políticas de moderación. La cooperación con estas plataformas, como en el caso de la Unión Europea, que ha establecido marcos regulatorios para la lucha contra la desinformación sin restringir indebidamente la libertad de expresión, puede ser una vía efectiva para equilibrar la protección del proceso democrático con los derechos humanos.

Por último, la regulación de la publicidad electoral en línea se perfila como un instrumento clave. Dado que gran parte de la desinformación circula a través de contenidos patrocinados en redes sociales y plataformas digitales, establecer criterios de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas en la publicidad política puede contribuir significativamente a mitigar sus efectos. Por ejemplo, medidas como la obligación de identificar quién financia un anuncio, cuál es su alcance previsto y qué criterios de segmentación utiliza, permiten que tanto las autoridades como los ciudadanos puedan ejercer un mayor control sobre la información que se difunde.

Una muestra de este enfoque es la denominada “Ley de las Fake News” impulsada en Brasil, cuyo texto fue debatido por el Congreso a partir de 2020. Aunque aún no ha sido aprobado en su versión definitiva, este proyecto propone, entre otras cosas, mecanismos para regular la circulación de contenidos pagados en línea y exigir la identificación de cuentas automatizadas (bots). Esta iniciativa surge como respuesta a los episodios de desinformación que marcaron las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, particularmente en torno al expresidente Jair Bolsonaro, y ha sido vista como un intento de equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger la integridad electoral. Del mismo modo, en la Unión Europea se ha implementado el Digital Services Act (DSA), que establece obligaciones específicas para las grandes plataformas digitales en cuanto a moderación de contenidos, publicidad política y transparencia algorítmica, con énfasis en los períodos electorales (Martini Bueno & Gadoni Canaán, 2024). Estas experiencias muestran que una regulación focalizada en los canales de distribución de desinformación, en lugar de castigar directamente a los emisores, resulta más compatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión y derechos políticos, al tiempo que preserva el pluralismo informativo en contextos democráticos.

REFERENCIAS

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1985). **Opinión Consultiva OC-5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas**. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12040.pdf>.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2011). **Caso López Mendoza vs. Venezuela**. https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). **Caso Yatama vs. Nicaragua**. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). **OC-28/21. La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos**. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). **Caso Castañeda Gutman vs. México**. <https://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM01.pdf>

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008). **Caso Kimel vs. Argentina**. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2014). **Informe Anual 2014**. https://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2014.pdf

De Freitas, R. D. (2023) **Inhabilitaciones políticas por vía administrativa: Otro atentado a la democracia en Venezuela**. Agenda Estado de Derecho. https://agendaestadodederecho.com/otro-atentado-a-la-democracia-en-venezuela/?utm_source=chatgpt.com

Froehlich, T. J. (2020). **A disinformation-misinformation ecology: The case of Trump**. In *Fake News Is Bad News-Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism*. IntechOpen.

Human Rights Watch (2023). **Nicaragua: Events of 2022. Human Right Watch**. HRW. <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/nicaragua>

Innerarity, D., & Colomina, C. (2020). La verdad en las democracias algorítmicas. *Revista CIDOB d'afers internacionals*, (124), 11-24.

Martini Bueno & Gadoni Canaán (2024). **El efecto Bruselas en Brasil: análisis del impacto de la ley de servicios digitales de la UE en el debate sobre el proyecto de ley de noticias falsas**. *Política de telecomunicaciones Volumen 48, Número 5*, junio de 2024. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102757>

Organización de los Estados Americanos. (2020) **Declaración Conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital**. <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1174&IID=2>

Santini, R. M., Tucci, G., Salles, D., & de Almeida, A. R. D. (2021). **Do you believe in fake after all? WhatsApp disinformation campaign during the Brazilian 2018 presidential election**. *Politics of disinformation: The influence of fake news on the public sphere*, 49-66. https://www.researchgate.net/publication/357318526_Do_You_Believe_in_Fake_After_All_WhatsApp_Disinformation_Campaign_During_the_Brazilian_2018_Presidential_Election

Sardiña, M. (2020). **“La persecución sigue”, dice Evo Morales tras la inhabilitación de su candidatura**. *France Press*, 21.02.20 <https://www.france24.com/es/20200221-el-tribunal-electoral-de-bolivia-inhabilita-la-candidatura-de-morales-al-senado>